

TRÁMITE: Aprobar la tipificación de conductas anti éticas para las Empresa Eléctricas Reguladas, en su relacionamiento con las Empresas Consultoras.

SÍNTESIS RESOLUTIVA: Aprobar la tipificación de conductas anti éticas para las Empresa Eléctricas Reguladas, en su relacionamiento con las Empresas Consultoras.

VISTOS:

La Constitución Política del Estado, la Ley N° 1604 de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad, el Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, el Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003 y todo lo demás que convino ver y se tuvo presente:

CONSIDERANDO: (Antecedentes)

Que la regulación tiene por objetivo la promoción de la competencia, la defensa de las libertades económicas de las personas vinculadas con la prestación de servicios públicos junto a la justicia y racionalidad en las tarifas, la protección del usuario, y todo esto bajo un sólo fin que es el de mejorar la calidad de vida de las personas.

Que la actividad reguladora enfrenta óbices como la captura del regulador y las asimetrías de información, estos fenómenos implican que las reglas de la regulación se distorsionen a favor de las empresas a expensas de los usuarios o de la sociedad, produciendo efectos negativos sobre los objetivos de la regulación.

CONSIDERANDO: (Fundamentación legal)

Que el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, establece que; el Estado asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama suwa, ama llulla (no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón), suma qamaña (vivir bien) y qhapaj ñan (camino o vida noble). Asimismo, el Estado se sustenta en los valores de igualdad, respeto, transparencia, bienestar común, responsabilidad y justicia social para vivir bien.

Que el artículo 108 de la precitada CPE, señala que son deberes de las bolivianas y los bolivianos el promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución; así como denunciar y combatir los actos de corrupción.

Que el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, consagra el derecho de toda persona al acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad, estableciendo que la provisión de los servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social.

Que el artículo 12 de la Ley N° 1604 de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad, establece que la extinta Superintendencia de Electricidad, actual Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, es el organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de regulación de las actividades de la Industria Eléctrica.

Que el inciso t) del artículo 12 de la Ley N° 1604 de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad, establece que el Superintendente de Electricidad, posee las atribuciones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades.

Que el artículo 47 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril de 2009, establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), fiscaliza, controla, supervisa y regula el sector de Electricidad.

Que el artículo 76 y siguientes del Decreto Supremo N° 27172, Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE, establece el procedimiento para la investigación de infracciones a denuncia y de oficio

Que los incisos b), c), i), j) del artículo 51 del Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, señala que las competencias de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad son las siguientes: Regular, controlar, supervisar, fiscalizar y vigilar la prestación de los servicios y actividades por parte de las entidades y operadores bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales; Implementar los aspectos relativos a la regulación, control, fiscalización y supervisión del sector de electricidad, en el marco de la Constitución Política del Estado; aplicar sanciones y/o medidas correctivas en los casos que corresponda y Conocer, procesar las denuncias y reclamaciones presentadas por personas naturales y/o Jurídicas, en relación a actividades bajo su jurisdicción.

CONSIDERANDO: (Análisis)

Que la ética es aquella parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones de los seres humanos, considerados individualmente o agrupados. En el primer grupo se tiene la moral o ética individual, y en el segundo la ética corporativa o institucional. Los principios y las normas éticas se han transformado en elementos claves de las políticas formales de las empresas, organizaciones e instituciones privadas y públicas.

Que en concordancia con los principios y valores fundamentales que establece la Constitución Política del Estado, las actividades que desarrollan las empresas consultoras y las empresas eléctricas reguladas y de éstas con el regulador, deben enmarcarse en los principios de integridad, idoneidad, honestidad, transparencia hacia el bien común.

Que el Plan Nacional de Desarrollo establece dentro del pilar Bolivia Democrática, lineamientos para la Gestión Pública y Transparencia, una propuesta de cambio para

lograr una mejor gestión gubernamental. Asimismo, el objetivo de la Política Nacional de Transparencia es dotar a las instituciones públicas, empresa privada, ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones sociales los instrumentos orientados a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

Que considerando la naturaleza de las actividades que desarrollan las empresas consultoras en su relación con las empresas eléctricas, éstas deben establecer un marco ético, que coadyuve a logro de las consultorías idóneas, al margen de hechos ilegales y anti éticos.

Que al normar la conducta ética, el fin último está orientado a generar credibilidad en la población respecto al accionar de las empresas prestadoras del servicio, que coadyuvan al quehacer de la regulación y por último al quehacer del ente regulador.

Que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, como ente regulador, en el marco de sus competencias legales precitadas, tiene la facultad para determinar los mecanismos normativos para velar que la información producida para efectos regulatorios se genere en cumplimiento de los principios fundamentados en los valores y en la ética a fin de asegurar su veracidad.

Que todas las disposiciones emitidas por el ente regulador tienen carácter obligatorio, y quien incumpla dichas disposiciones incurre en infracción, sancionada por las normas procedimentales del sector.

CONSIDERANDO: (Conclusiones)

Que por todo lo expuesto y en mérito a la normativa vigente del sector eléctrico, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en el marco de sus atribuciones y competencias define las conductas anti éticas en las que incurran las empresas reguladas en su relacionamiento con las empresas consultoras, que darían lugar a responsabilidad de la empresa regulada en caso de comprobarse su comisión.

CONSIDERANDO: (Competencias y Atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad)

Que el artículo 138 del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, dispuso entre otros, la extinción de las Superintendencias Sectoriales, en el plazo de sesenta (60) días y estableció que las competencias y atribuciones de las mismas sean asumidas por los Ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma expresa.

Que el Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, que en su artículo 3 determina la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE, estableciendo que las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones de las extintas Superintendencias Sectoriales serán asumidas por las Autoridades de Fiscalización y Control Social en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado.

Que el artículo 47 del Decreto Supremo N° 0071 de 9 de abril 2009, establece que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), fiscaliza, controla, supervisa y regula el sector de Electricidad considerando la Ley N° 1604, de 21 de diciembre de 1994 de Electricidad; y sus reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley de Electricidad, su Reglamentación, el Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, y demás disposiciones legales vigentes.

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar la tipificación de conductas anti éticas para las Empresas Eléctricas Reguladas, en su relacionamiento con las Empresas Consultoras, en la realización de consultorías de revisión y fiscalización.

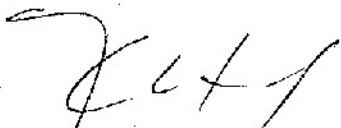
SEGUNDO.- Establecer como conductas anti éticas para las Empresas Eléctricas Reguladas en su relacionamiento con las Empresas Consultoras las siguientes:

- a) Entregar dádivas, regalos, obsequios y/o beneficios de cualquier índole a personal técnico o ejecutivo de las empresas consultoras.
- b) Desempeñar simultáneamente funciones de socio, gerente, supervisor, encargado, especialista o personal de la Empresa Consultora, responsable de prestar servicios en las empresas reguladas, y ser accionista, socio, director o síndico u órgano equivalente en la empresa regulada.
- c) Cuando la información confidencial que debe resguardar la Empresa Consultora, es comunicada a la empresa regulada.
- d) Tergiversar y sesgar la información entregada a la empresa consultora, para beneficiar a la empresa regulada.
- e) Contratar los servicios profesionales de socios, gerentes, supervisores, encargados, especialistas o personal de la Empresa Consultora que prestó servicios en la empresa regulada, hasta un año después de haber concluido la actividad consultora.

TERCERO.- Conocida la conducta anti ética o ante la existencia de indicios de haber incurrido en alguna conducta anti ética por la empresa regulada, en su relación con la empresa consultora, se iniciará el procedimiento sancionador establecido en los artículos 75 y siguientes del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Sistema de Regulación Sectorial – SIRESE. Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 27172 de 15 de septiembre de 2003.

CUARTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución Administrativa en un órgano de prensa de amplia circulación nacional para fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Nelson Caballero Vargas
DIRECTOR EJECUTIVO

Es conforme:


Nilka Barrera Lujan
DIRECTORA LEGAL a.i.